

# ¿Justicia y educación sin rostro?

Colombia experimentó la regresiva ‘Justicia Sin Rostro’, y persiste esa corrupción: las empresas nunca dan la «cara» al cliente, y la educación se contagió durante la pandemia.

Competitividad implica asumir «competencias» tiránicas. Sociópatas, líderes y seguidores, usan máscaras y uniformes -ojalá traje- cuando hablan de ética, responsabilidad social y sostenibilidad. Cómplices de semejante disfuncionalidad, las consultoras en gestión de talento recomiendan el «anonimato», en los procesos de selección (assessment) y evaluación del desempeño (por «competencias»), para minimizar los sesgos.

El riesgo moral se gesta desde la formación infantil. Ahora, confinados, los niños interactúan con sus maestros mediante pantallas retro, cuya resolución proyecta imágenes tipo «Minecraft» y sonidos de «bot», mientras las creativas *Ministra de Educación Nacional* y *Secretaria de Educación Distrital* proponen jugar al colegio usando «mascarilla».

Como si estuvieran entrenando androides, su apuesta es que no aprendan a reconocer patrones faciales, aunque el componente no verbal predomina en la comunicación humana, según la regla de **Mehrabian** (1981). Peor aún, durante el «recreo recrearán» cierto «facismo» o secuestro, pues no tendrán permitido salir, compartir alimentos y jugar.

Quizás se consideran pedagogas empíricas, y se vendieron como expertas ante sus jefes, el Presidente y la Alcaldesa. Tanta ignorancia o falta de pertinencia es comparable a la de la Vicepresidenta, que menoscaba las humanidades porque sueña con un país «Lego», donde solo haya bloques y máquinas.

Su falta de empatía quizás se debe a la naturaleza de sus profesiones -economía, contaduría, finanzas, impuestos y abogacía-, donde solo aprenden a manipular las neuronas «espejo» para disputarse quién tiene la opinión «más bella» ante los barómetros, de «cara» a la siguiente elección: no la futura generación (parafraseo a **Von Bismarck**).

**LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA ANTIGUA NORMALIDAD ERAN DEFICIENTES**

Identificarse con el sentir ajeno -así como identificar el propio-, es fundamental para desarrollar inteligencia emocional. Nuestra brutalidad en esa «competencia», además de la pobreza del PIB, detona conflictos y miseria; bono social, será la única habilidad que probablemente nunca apropiará la inteligencia artificial, y mejorará nuestra capacidad electoral, si aprendemos a distinguir ejecutivos, doctores y políticos, que mienten u ocultan verdades, como demostró la falta de transparencia, de largo plazo, en el caso de la «heroína» y la «Justicia Especial Pagando» fianza (JEP-f).

Para terminar, la alternancia no tiene sentido logístico para los padres, práctico para los maestros, ni lógico para los niños. Respecto a los grandes, los estándares de calidad de la antigua normalidad, secundaria y universitaria, eran deficientes; ahora, ¿echarán la culpa a la nueva modalidad?

Dejen de distraerse, y dediquémonos a trabajar en la reingeniería metodológica de la educación. Estudiantes, asuman autonomía: es el enciclopédico Siglo XXI, y disponen de una miríada de recursos para aprender en internet. Maestros, den la cara y construyan una relación con sus aprendices.

La *Universidad de Tilburg* declaró negligente al *Ministro de Vivienda*; haber reconocido plagio, habría sido dejar «sin piso ni techo» el corruptible sistema de acreditación. Tal como la Vice, «des-cara-do».



**SANTIAGO CASTRO**  
*Presidente de Asobancaria*  
scastro@asobancaria.com



**GERMÁN EDUARDO VARGAS**  
*Catedrático/Columnista*  
german.vargas@uniandes.edu.co

# Un justo balance

Se cumplen tres meses desde que, a través del Decreto 457 de 2020, Colombia inició un confinamiento obligatorio como medida para reducir la propagación del covid-19. Tres meses que arrojan hoy un balance inquietante no solo en materia económica y social, con más de cinco millones de empleos destruidos y una contracción económica sin precedentes, sino en materia sanitaria, con una curva epidemiológica que supera los 70.000 contagios y 2.300 muertes.

Un balance en el que hay que destacar, desde luego, los esfuerzos que desde el *Gobierno* y el sector privado se han venido haciendo para enfrentar esta pandemia. El *Gobierno*, gracias a unas medidas sanitarias oportunas, ha venido enfrentando con asertividad la difícil dicotomía entre confinamiento y economía, hoy con una reactivación gradual en sectores estratégicos que esperamos permita mitigar los ritmos de contracción en la actividad productiva y el empleo. El sector privado, altamente afectado, ha mostrado también una gran resiliencia, la cual ha permitido sin duda acotar el deterioro del mercado laboral.

El papel del sector financiero, en este escenario, ha sido quizás uno de los más destacables. Sus esfuerzos, producto de su compromiso con el país, le han permitido enfrentar los efectos adversos de esta pandemia a miles de colombianos. Hay que destacar, por supuesto, la continuidad en la atención de las enti-

dades a los usuarios a través de sus distintos canales, pues si bien la preferencia por la digitalización para realizar operaciones financieras se incrementó, las entidades continuaron asegurando la prestación de servicios en más de 85% de oficinas en el país.

Sus ingentes esfuerzos, considerando que cerca de 85% de los recursos corresponden al ahorro de los mismos colombianos, han ido de la mano de una gestión prudencial de los depósitos y un estricto proceso de regulación y supervisión en la colocación, en pro de garantizar la estabilidad del sistema y su transparencia.

Gracias a su compromiso, e incluso de forma previa a la expedición de medidas regulatorias, la banca ha ofrecido diversas herramientas para aliviar el flujo de caja de miles de colombianos. Se ha apersonado del proceso de dispersión de subsidios para hogares y empresas, que derivan de un gran esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional, poniendo a disposición de esta toda su red de canales y productos, e incluso capital humano, sin mediar por costos operativos. Esto ha permitido llegar a más de 2,5 millones de colombianos en condición de vulnerabilidad a través del ingreso solidario y a más de 100.000 empresas a través de subsidios para el pago de nómina en el marco del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef).

Hoy el balance permite destacar que los alivios a través de

periodos de gracia otorgados hasta el momento, en el marco de las circulares 7 y 14 de la *Superfinanciera*, han beneficiado a más de 10,6 millones de colombianos, por un monto cercano a \$211,55 billones, lo que corresponde a 42% del total de la cartera. A su vez, conscientes de las necesidades de financiación en el actual contexto, desde el 24 de marzo al 12 de junio la banca ha desembolsado nuevos créditos para personas naturales y jurídicas por un monto cercano a \$61,9 billones, distribuidos en su mayoría a pequeñas, medianas y grandes empresas. Por su parte, los créditos otorgados a través de las líneas del *Fondo Nacional de Garantías (FNG)*, al corte del 18 de junio, bordeaban los 76.862 desembolsos, por un monto cercano a los \$3,76 billones para capital de trabajo, pago de nómina, independientes y microfinanzas.

Si bien el balance en materia económica y social es incierto, los esfuerzos desde el sector financiero han sido un pilar fundamental para enfrentar esta pandemia. Los colombianos no deben tener la menor duda de que cuentan con una Banca aliada, cercana y dispuesta siempre a dar soluciones oportunas y asertivas. Una banca que, entendiendo las dificultades que trae consigo la actual coyuntura, esta lista para seguir mostrando con transparencia su compromiso con los colombianos, contribuyendo sin descanso a superar esta lamentable crisis.

# Derechos de autor: fiesta con poco baile



**FELIPE NÚÑEZ FORERO**  
*Docente de Derecho Económico U. Externado*  
fnunez@perspectiva.com.co

El mercado de los derechos de autor en Colombia -que es el corazón de la industria creativa- parece cada vez más a una triste fiesta en la que casi nadie baila.

Los artistas y creadores de los contenidos, que con su talento componen, escriben, actúan y cantan, van a la fiesta pero no bailan. Los usuarios de las obras, aunque pagan la boleta de la fiesta -pues a ellos se les cobra por el derecho a usar las obras creadas por los artistas y creadores, tampoco bailan. ¿Pero quién baila entonces en una fiesta con tantas caras largas?

Bailan los de siempre: *Sayco*, *Acinpro* y otras *Sociedades de Gestión Colectiva (SGC)*, que aunque son solo intermediarias entre los creadores y los usuarios, son los únicos que disfrutan la fiesta.

El problema que enfrenta el mercado de los derechos de autor se ha hecho visible porque varios artistas han denunciado que *Sayco* les ha hecho cobros desproporcionados por interpretar sus propias obras en espectáculos virtuales.

Pero ojo: el problema no es nuevo ni se limita solo a los artistas y creadores.

Los usuarios de las obras han sido por mucho tiempo víctimas silenciosas: han sufrido por años los mismos abusos que hoy denuncian los artistas y empresarios. A restaurantes, hospitales, aeropuertos, hoteles, tiendas de barrio, centros comerciales, operadores de televisión, bares y empresas de transporte, entre muchos otros, les cobran sumas desproporcionadamente altas que nadie sabe bien cómo se fijan. En muchos casos se trata de sumas tan altas que simplemente hacen inviables los negocios.

**LOS USUARIOS DE LAS OBRAS HAN SIDO POR MUCHO TIEMPO VÍCTIMAS SILENCIOSAS**

¿El resultado? Se asfixia un mercado que hoy más que nunca debería florecer.

Ante esta realidad, el *Congreso* y el *Gobierno* tienen hoy una oportunidad de oro para evitar que los abusos de las *Sociedades de Gestión Colectiva* marchiten la industria de creación de contenidos.

Aunque las fórmulas de solución pueden ser muy varia-

das -y el problema no es sencillo- para que la solución sea efectiva a largo plazo debe enfocarse en enfrentar el origen último del problema: el potencial de abuso de la posición dominante que tienen las *SGC* en los mercados en los que operan.

Las herramientas legales para ello están sobradamente justificadas: justamente para enfrentar este tipo de problemas, el artículo 333 de la Constitución establece para las autoridades el mandato de evitar y controlar “cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.

Controlar ese potencial de abuso permitiría al mercado contar con unas tarifas equilibradas (no abusivas) con las que el recaudo de las *SGC* aumentaría con el tiempo: los usuarios tendrían estímulos para usar cada vez más contenidos y los autores encontrarían motivación suficiente para participar en los procesos creativos.

Allí deben enfocarse todos los esfuerzos para que en el mercado de derechos de autor no bailen solo unos pocos.